

MARIANO NAVARRO RUBIO

LA INFLACION COMO PROBLEMA  
POLITICO

Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 52, 1975



# La inflación como problema político <sup>(1)</sup>

por el Académico de número

Excmo. Sr. D. MARIANO NAVARRO RUBIO

## SEMBRAR ESPERANZA

Asistí, hace poco, a uno de los actos más intrascendentes, al parecer, que existen: una comida de homenaje. Creí que iba, tan sólo, a testimoniar mi afecto a un buen amigo y sumar mi adhesión personal a la de otros muchos que, más o menos, estaban poseídos de los mismos triviales sentimientos. Puestos a buscar motivos de especial significación, quizás se pudiese pensar, también, en que todos los que estábamos allí presentes, queríamos, de algún modo, exteriorizar nuestra solidaridad con una conducta torpemente fustigada, que pedía el reproche de quienes no habíamos sabido reconocerla con la justa ponderación de sus méritos. Desgraciadamente, la significación reparadora de un acto suele tener más capacidad de convocatoria que la pura y simple expresión de pleitesía. Aun aceptando esta intención vindicativa —que por otro lado no existió— el acto, en principio, no daba más de sí, según todas mis figuraciones. Pero me equivoqué; porque después de oír unos cuantos discursos de circunstancias, me picó la sensibilidad un sentimiento de esos que despiertan grandes ideas y salí convencido de que debía decir, pensar o hacer algo para dar satisfacción a mis propias inquietudes.

---

(\*) Disertación en Junta del 20 de mayo de 1975.

La idea que pedía insistentemente mi atención fue la de la esperanza. Era como un sonsonete de llamada, que repiqueteaba continuamente en todas las intervenciones. Todos los oradores —algunos de ellos improvisados— venían a decir lo mismo: nuestro querido D. Vicente —que así se llamaba el homenajead—, en todos los sitios por donde había pasado, y en todos los asuntos que había dirigido o había participado, tuvo siempre la virtud de abrir esperanzas. La moraleja surgía fácilmente: el mundo actual vive momentos de tremenda desilusión y había que sacudirlo con todos nuestros bríos para que no se dejase dominar por la pesadumbre, hasta perecer en un triste vacío político, lleno de suicidas dejaciones.

Las ideas que allí se cruzaban venían a descubrir ese contraste paradójico que, a mi entender, se da siempre en las grandes crisis. Si hablamos ahora razonablemente de esperanza, es porque no la hay... Para que las cosas se pongan bien, tienen antes que ir muy mal —según el conocido adagio popular—. Es ciertamente desolador observar el grado de escepticismo que existe —sobre todo en las esferas del Gobierno—; pero precisamente porque la desilusión está tocando fondo es por lo que cabe confiar en una decidida búsqueda de soluciones nuevas, esperanzadoras...

La paradoja suscitaba el planteamiento de una tesis sobre la situación presente. El problema lo veía de este modo: el mundo se había deslizado de prisa y con mucha confianza por la pendiente de un materialismo desenfrenado. Todo parecía marchar por el camino de un alucinante progreso y, de repente, nos encontramos ante una crisis en todos los órdenes de la vida: religioso, social, moral, familiar, político y económico que nos amenaza con lanzarnos hacia un profundo despeñadero. La confusión es tremenda; pero tiene de positivo que hemos tomado conciencia del peligro y por ello podemos salvarnos. Es una especie de esperanza por reacción. Hace falta sentir socialmente miedo al futuro inmediato para detenerse a tiempo de evitar el descalabro y volver la mirada hacia otra perspectiva distinta, que nos haga pensar en sanos ideales y nos llene el corazón de buenas ilusiones.

No viene mal que se hable mucho de crisis, si se toma efectivamente conciencia de que va de veras; porque si no nos disponemos a buscar pronto fórmulas salvadoras, nos hundiremos irremisiblemente en una catástrofe de esas que marcan un hito

en la Historia. Lo peor que puede suceder es que nos conformemos, por ejemplo, con la inflación, diciendo, para tranquilizar nuestra inquietud, que es un mal de muchos y, por añadidura, tolerable. De ahí a la tragedia, no hay, en el mejor de los casos, más que unos pocos años. Fijémonos bien, a este respecto, como si fuese un barómetro, en nuestra cuenta de divisas.

La solución no será, desde luego, fácil. Si lo fuese, ya la habría encontrado cualquiera de los países adelantados de nuestro mundo occidental. Las razones por las que todos fracasan son bien sabidas: hacen falta Gobiernos fuertes, como primera providencia, y eso nos deja en el más perplejo de los silencios; reclama, razonablemente, planteamientos políticos nuevos —de base— que nos liberen de viejas ataduras, y tampoco parece que el tinglado politocrático, capitalista, sindical, etc., esté muy dispuesto a dejar que se impongan otras organizaciones y otros modos de actuación distintos de los suyos. Ahora bien, el hecho de que no sea fácil la solución sólo indica que deberá lucharse más por alcanzarla.

La lucha en circunstancias difíciles es muy saludable y ofrece, además, una gran rentabilidad política: pide, eso sí, reciedumbre —que nos hace, por cierto, mucha falta—. Desconcierta al enemigo, acostumbrado a las pequeñas artimañas de la política de enredo. Se le obliga, al menos, a luchar en otro terreno. Trueca la incredulidad en confianza tan pronto como se consiguen los primeros éxitos. El pueblo está deseoso de vivir sin angustia. Y una pequeña serie de triunfos inesperados cambia la animosidad de las gentes y puede dar la vuelta a un país en poco tiempo. Sólo hace falta garantizar el capital político necesario para su arranque. En definitiva: dinero, autoridad y, si es preciso, fuerza.

Si el dinero se tiene, difícilmente encontrará mejor destino que éste. Y si no se tiene, se pide. Hasta ahora, nunca han faltado órganos ni recursos internacionales dispuestos a colaborar cuando se hace un plan serio.

La autoridad sólo se consigue con ideas nobles, amplias, plenas, claras, que envuelven por completo la conocida pequeñez y torpeza de la actual política de circunstancias. Existen estas ideas capaces de despertar ilusiones: son los principios. Los ya conocidos, los cristianos, los eternos, los de siempre, sólo que vividos de forma que no permitan las graves desvirtuaciones que hemos

padecido en épocas pretéritas no lejanas y, sin duda alguna, en la presente.

Hemos aprendido bastante en los últimos tiempos acerca del juego farisaico de las viejas ideologías políticas. Posiblemente no habrá problema que nos encuentre mejor preparados para atacarlo convenientemente. Sabemos mucho de equivocaciones. Afortunadamente, porque esta es la mejor enseñanza de la crisis. Decía Demóstenes a los atenienses en momentos muy difíciles para su patria: «Dichosos nosotros que hemos cometido errores. Si hubiésemos obrado bien, al contemplar la triste situación en que nos encontramos, no tendríamos nada que hacer más que rumiar nuestra propia desesperanza. En la rectificación de nuestra conducta está el anuncio de la victoria».

Todos —o casi todos— tenemos conciencia de los fallos que existen en la vida política actual —deterioro del principio de autoridad, gigantismo administrativo, suplantación social por el Estado, gastos excesivos, actuación disolvente de los grupos y partidos, etc., etc—. No se puede hacer nada, desde luego, con sentido constructivo, sin rectificar estos defectos y tolerancias que atacan gravemente los fundamentos del Estado y de la sociedad.

Pero es un tanto inútil tratar de rectificarlos contemplando tan sólo el aspecto negativo del problema. Hay que ofrecer, al mismo tiempo, líneas de renovación sugestivas, objetivos bien señalados, planes concretos, fórmulas viables, razones, en suma, de credibilidad en la reforma, bien auxiliados, claro está, por una técnica consciente y una política con fuerza suficiente para realizar el cambio.

No se puede decir si este cambio será revolucionario o simplemente evolutivo. Dependerá del fin que se persiga, de las circunstancias que lo rodeen y de las resistencias con que tropiece. No tiene mucha importancia, a mi entender, esta distinción, en una época acostumbrada a experimentar mutaciones tan profundas. Lo importante es conservar siempre la iniciativa, realizar una política de oferta de soluciones, de anticipación en la jugada —como se dice en términos deportivos—, en lugar de estar tan sólo a la procura de remedios en caso de siniestro político. Una política a la demanda, en el momento presente, está condenada irremisiblemente al desbordamiento.

Tampoco se puede hacer una política a la oferta, sin un pro-

grama razonable. De ahí la conveniencia de que los distintos grupos o asociaciones políticas se dediquen fundamentalmente al estudio de los problemas, aunque vaya a contrapelo de su especial aplicación a la crítica de derribo. Cambiar por cambiar y criticar por criticar sólo conduce al caos. Y se corre este peligro. La reciente experiencia española de algunas políticas —como la de educación, por ejemplo— lo pone de manifiesto. Con tantas idas y venidas se acaba por llegar a ninguna parte.

Domina en el momento presente, asimismo, una mentalidad pragmática, preocupada por buscar en todos los problemas soluciones de emergencia. Esta visión de corto alcance cierra por completo el horizonte y no hace más que meternos en callejones estrechos sin salida. No pasará mucho tiempo sin que todos se den perfecta cuenta de que únicamente con unos buenos principios volveremos a adquirir sentido de la orientación y a alargar nuestra mirada con perspectivas de cierto alcance.

No se pueden olvidar tampoco los sentimientos sociales. Una política de principios —de buenos principios, se entiende— los depura y ensalza. Bastaría con sacarlos a la superficie para despertar una auténtica protesta —o contraprotesta— ante la sequedad racionalista, que está quitando toda ejemplaridad e incluso sabor humano al quehacer público. Se habla mucho de libertad, por ejemplo; pero despojada de los sentimientos de dignidad, responsabilidad, decoro y respeto, que le dan un contenido completo. Sin estos atributos positivos, que juegan como correcciones equilibradoras, el primero de nuestros categoremas políticos se convierte en una auténtica amenaza social. Y debiera ser todo lo contrario. La verdadera revolución, la auténtica escalada del avance social y político está en convertir estos sentimientos latentes en auténticos hechos sociales; en despertarlos a la conciencia nacional con toques de gracia política. Por ahí tiene que caminar la sana renovación de la vida pública.

Estas eran las ideas que bullían en mi cabeza cuando se oyeron las últimas palabras del homenajeado. Habló, en términos retóricos, de sembrar buenos principios en la tierra actual, seca y parda, para que se cubra pronto con el color verde de la esperanza. En cualquier otra ocasión me hubiese parecido esta metáfora un lugar común de esos que se aplauden con desgana, por exigencias

de una regla convencional de educación; pero la verdad es que, habida cuenta de las actuales circunstancias, me hizo bastante mella y me ha llevado a escribir este primer artículo, a modo de prólogo, para presentar mi preocupación del modo más expresivo que sepa; definir a las claras, en un segundo artículo, la verdadera entraña del problema y apuntar, por último, en un tercer trabajo, las soluciones que considero más adecuadas: cavar un surco muy profundo en la realidad para luego sembrar esperanza.

Mi preocupación actual, dicho sin el menor paliativo, consiste en la creencia de que podemos encontrarnos, en el mundo occidental, ante una situación muy parecida a la que produjo la caída del Imperio Romano. No soy el único que ha pensado en esta similitud de circunstancias. Vamos a verlo.

### LA INFLACION MORTAL DEL IMPERIO ROMANO

En una de las reuniones anuales de la Mont Pelerin Society, celebrada en Princeton, en septiembre de 1958, el Profesor Graham Hutton presentó un trabajo sobre la antigua sociedad romana. Perseguía —según tiene declarado— el propósito de sacar provechosas enseñanzas, incitadoras de saludables soluciones, a fin de salvar, si todavía es posible, el proceso democrático. Y lanzaba esta proclama de alerta porque veía seriamente amenazado el sistema de vida del mundo libre, a causa de una inflación persistente. Es de advertir que no se había producido aún el duro golpe de la subida de los precios del petróleo. La referencia a la tan traída y llevada sociedad romana venía a colación, en este momento preciso, porque se tiene el firme convencimiento de que la inflación actual, la que padece ahora el mundo occidental, ofrece grandes analogías con la sufrida por Roma, a partir del siglo III. Y sabido es que esta inflación, según todos los analistas —Brentano, Robert, Walbank, Frank, etc.—, ocasionó el desmoronamiento del Imperio más grande que ha conocido la historia.

Este problema se ha estudiado con mucha atención, por la cuenta que nos trae. Hay que señalar especialmente los trabajos de Nicolet Claude sobre la variación de precios y la teoría cuantitativa de la moneda en la Roma de Cicerón a Plinio el Viejo o el trabajo de Michael sobre el problema de la liquidez y la devaluación monetaria en la antigüedad clásica. Así de fino se está

hilando ya por los especialistas monetarios. Yo no soy ningún investigador de la economía. Me considero, a lo sumo, especialista en la captación de los problemas político-económicos que hayan podido existir en una situación, y en buscar, siempre con mi mejor buena fe, el remedio más adecuado. Con este propósito invito a repasar la lección del pasado, por si puede ser útil en el momento presente. Creo que no se perderá el tiempo, porque en todo caso nos suscitará opiniones bien avisadas.

El problema de la inflación, con su manifestación más clara de subida continuada en los precios, se ha presentado a lo largo de la Historia en distintas épocas, países y por las más variadas causas. Así, en la Antigua Grecia, con la puesta en circulación por Alejandro de los ingentes tesoros procedentes de Persia. En la Europa Medieval, después de la peste negra de 1348, con una fuerte e insospechada subida de salarios. En la Europa del Renacimiento, con aquellas teorías de Bodino sobre la soberanía del Estado y el juego de su moneda, que sirvieron perfectamente a los señores para que el pueblo les pagase sus guerras, palacios y ostentaciones. En la Península Ibérica, durante el siglo XVI —y después en toda Europa— con la afluencia de oro y plata del Nuevo Mundo. Durante las guerras napoleónicas, artificialmente financiadas. Y en la primera y segunda guerras mundiales, con Administraciones dispendiosas como la de Alemania posterior a 1921, con su deliberada fuga de capitales y la rienda suelta a la emisión de billetes, o la de Hungría de 1944. Pero el fenómeno inflacionario más amplio, profundo y trascendente que registra la Historia fue, sin duda alguna, el que originó la crisis del Imperio Romano, a partir del siglo III. Abarca y estruja una civilización entera. Se encuentra, además, muy bien estudiado en los hechos y motivaciones. Y se presenta con tanta lejanía en el tiempo que bien podemos colocar, con toda sinceridad, sin temor a engaño, la conocida excusa de que cualquier parecido con las personas que juegan políticamente en la vida actual es pura coincidencia.

Como siempre ocurre ante un hecho de tan colosales proporciones, junto al problema principal aparecen otras causas de descomposición concomitantes, de todo tipo: religioso, moral, social, militar, etc., todas ellas con su inevitable repercusión política directa o refleja. Hubo, ciertamente, una crisis espiritual aun dentro del cristianismo, de la que es un índice el gran número

de polémicas teológicas que servían de fermento a la herejías. El sector pagano mostraba contrastes tales como el de la exaltación del complejo y delicado pensamiento filosófico neoplatónico, frente a la más primaria y burda celebración de las prácticas mágicas. En el orden moral, la reciedumbre estoica, que tanto había contribuido a dar temple vigoroso al pueblo romano, se consideraba ya como algo anacrónico, propio de las viejas generaciones y estaba, además, minada por una mancha erótica, cada vez más extensa, que ensuciaba y enervaba todo el ambiente. El ejército, debilitado por la falta de recursos financieros y dividido con las rivalidades internas de la Casa Imperial —unido a la abstención popular en relación con sus problemas y a ciertas posturas religiosas inhibitorias— no pudo lograr ni siquiera la movilización de las pocas fuerzas necesarias para contener la penetración germánica en Occidente durante el siglo V. Todos estos elementos de descomposición existieron y jugaron, ciertamente, de un modo decisivo en la caída del Imperio Romano; pero el más demoledor de todos fue la inflación.

Los historiadores señalan como culpables de la inflación las siguientes causas: en primer lugar, la política de complacencia que se veía forzado a realizar el Poder Público. El emperador tenía que mostrarse obsequioso con los grupos de presión —decusiones, senadores, pretorianos— que sostenían su trono. Las exigencias políticas de estos grupos en defensa de los intereses que representaban, limitaban, condicionaban e impedían una congruente y eficaz acción del Gobierno. En segundo lugar, el Estado Romano, para mantener bien trabado su Imperio por el mundo, hubo de gastar siempre sumas muy considerables de dinero. Es obvio, por otro lado, que el aumento de los gastos públicos exigía el consiguiente incremento de la presión fiscal, que llegó a alcanzar conceptos difícilmente imaginables. Baste con decir que en la época de Calígula se gravaban hasta los abrazos que concedía cualquier mujer pagada. En tercer lugar, los controles se hacían cada vez más extensos y entrometidos. El Poder tenía que actuar de un modo oportunista y muy complicado. La maquinaria estatal era cada vez más grande. Crecía inexorablemente. Y se hizo tan colosal que, como dice Gibbón con frase ya clásica, «el enorme aparato que montó el Estado acabó por ceder ante la presión de su propio peso».

Lo grave del caso es que no se puede tachar, en este punto, al

Poder Público romano de negligente. La ideación de los gobernantes por atajar los problemas causados por la inflación fue, ciertamente, muy fértil. Resulta difícil encontrar en los tiempos modernos una medida correctiva que no hubiese sido ya experimentada en los últimos tiempos del Imperio. Como consecuencia del aumento de los gastos públicos —especialmente militares— y ante la imposibilidad práctica de aumentar la presión fiscal se utilizó el fácil truco de devaluar la moneda. Fue contraproducente: en la época de Cómodo, la tensión deflacionista provocó la quiebra de la Banca romana. Tuvieron también su experiencia sobre el oro, con su inevitable carrera de subida de precio, tan pronto como las provincias de Oriente se negaron a cambiar las otras monedas blandas, de plata y cobre, a su cotización oficial. Vivieron intensamente la política de abastecimientos, con sensibilidad popular, proporcionando alimentos al pueblo en condiciones de pura pérdida para el Estado. Con Alejandro Severo, el proteccionismo se manifestó en toda su crítica gravedad: aumento del desequilibrio coste-venta, acentuó el grado de monopolio del Estado y produjo un grave deterioro a la producción privada. Los más perjudicados resultaron ser los pequeños propietarios, a los que en vano se intentó satisfacer con el señuelo de unos préstamos a largo plazo.

Tampoco se puede decir que no se adoptaron medidas duras —contra el pueblo común, claro está—. Con la época de los emperadores soldados, los procedimientos militares fueron trasladados a la Administración. Los problemas económicos se intentaban resolver con disposiciones y edictos, creyendo, por lo visto, que la economía se amoldaría a las exigencias imperiales. Diocleciano mandó publicar el famoso «Edictum de Pretiis», por el que se proclamaba como crimen capital elevar cualquier precio en cualquier lugar del Imperio. Nunca ha llegado la política a una decisión tan temible y forzada. Fue inútil. El decreto tuvo que abandonarse al cabo de dos años por inaplicable. No había soldados suficientes para cortar el número de cabezas que según la ley debían haber caído. «Las leyes económicas y de naturaleza humana —como dice Graham Hutton— derrotaron incluso a Diocleciano.»

Y llegó el desenlace, tras una confusión de fuerzas y un trastrueque de posiciones que dejó completamente desasistido al Poder Público. Los grupos de presión que habían aparecido en la

última época: la nueva aristocracia de corte, la cada vez más potente burocracia —todavía aumentada por Constantino— y el temible ejército, se disputaban el poder, estando todos previamente de acuerdo en suprimir a los senadores y decuriones —que, por otro lado, tampoco tenían mucho de respetables—. Los senadores abandonaron el poder y muchos de ellos se convirtieron en grandes terratenientes. Los campesinos se acogieron a la protección de estos grandes propietarios residenciales, capaces ya de administrar la justicia por su cuenta, bien protegidos por ejércitos privados, con los que se enfrentaban por igual a los campesinos sublevados —bagaudas— que a los recaudadores imperiales de impuestos. Los pequeños artesanos de la ciudad prefirieron refugiarse en los gremios, aun a costa de perder su independencia. Todo les resultaba más tolerable que las amenazas e inclemencias del Fisco. En las ciudades triunfaban únicamente los funcionarios, cuyo cargo les eximía de tasas y gabelas. La vieja «élite» educada en la ciudad, correspondiente a la clase de los decuriones, había abandonado también el poder —como los senadores— e incluso intrigaba para que entrasen los bárbaros en las ciudades occidentales. En un estudio publicado en Oxford y Londres por Tenney Frank, se dice lo siguiente: «Cuando llegaron los bárbaros, los habitantes del Imperio dudaban si merecía la pena salvarlo y muchos estaban contentos de rendirse, en la creencia de que cualquier régimen nuevo no podría ser peor que el que habían soportado».

En suma, el Poder Público, tal como estaba montado en el Imperio Romano, no pudo nunca romper los condicionamientos políticos que le impedían combatir la inflación en sus raíces más hondas. Esta es la lección de la Historia. Y la inflación acabó con el Imperio Romano.

Me impresionó mucho una frase de Keynes en *The Economic Consequences of the Peace*. Decía así: «No hay forma más sutil y segura de trastocar la base existente de una sociedad que la de corromper la moneda. El proceso —añade a título de explicación suficiente— comprende todas las fuerzas de las leyes económicas del lado de la destrucción». Y lo mismo decía constantemente Lenin.

Es preciso llegar al convencimiento claro de que una inflación persistente es capaz de arruinar por sí sola cualquier sistema organizado de vida. La inflación no sólo perturba los esquemas

básicos de producción, consumo e inversión en que descansa una economía sana, sino que trastoca también, arbitrariamente, esquemas de vida y patrones de valor más valiosos que el oro. Se cambia la estructura de la sociedad: se disuelven las formas de vida consolidadas —pensionistas, familias con renta fundada, ahorros normales y honestos—; se altera el sentido de lo que es lícito, aconsejable y, en definitiva, moral; la moral deja de jugar, vencida por los más fuertes ataques, y se pierde el respeto a las exigencias impuestas por la ley; la ley muere por su propia inoperancia—. Un proceso de descomposición envuelve todas las fuerzas y un malestar subyacente provoca toda clase de tensiones. Y se acaba por caer en una grave crisis de desconfianza no ya tan sólo en el sistema económico, sino en el sistema político que permite tal estado de cosas. No se hace literatura negra al decir estas frases. Es la pura verdad. De esto tenemos experiencia todos.

Pudiera haber hecho, sobre la marcha, muchas paráfrasis que sirviesen de comentario actual del ejemplo romano: la política de gastos públicos excesivos; la complacencia con los grupos de presión que sostienen el poder —capitalistas y sindicatos— sobre todo cuando pactan entre ellos; gigantismo de la Administración Pública; presión fiscal capaz de provocar serias desviaciones; ascenso de la burocracia calificada al Poder Público, y hasta la presencia de bárbaros en nuestras fronteras y dentro de casa.

Pero sólo quiero plantear una cuestión que me parece de importancia vital: ¿El sistema político del mundo occidental está montado de forma que pueda combatir la actual inflación con probabilidades de éxito? Porque si el juego de las fuerzas políticas impide adoptar aquellas soluciones que resulten aconsejables, parece honesto pensar en un cambio de la actual estructura sobre la que se monta el Poder Público. Lo contrario sería una inhibición no ya sólo grave, sino razonablemente suicida. Evidentemente, la dificultad es grande; pero no excusa el abandono del problema. Ni el hecho de que sea un mal de muchos, tampoco. Ni el temor a fracasar en el empeño puede reclamar una actitud de cauta pasividad, porque vendrán después otros que recogerán los frutos de este supuesto sacrificio político. No está, ciertamente —a mi entender—, el mundo occidental en estos momentos a la altura de su circunstancia histórica. Debemos tener miedo al miedo de los gobernantes para enfrentarse con este problema. Y acuciarlos para que reaccionen, porque sólo así despertaremos

la inquietud y sembraremos esperanza. En mi próximo artículo hablaré claramente de este problema.

## EL VICIO POLITICO DE LA INFLACION

En el año 1972 se editó en Nueva York un libro, *Convertibility Multilateralism and Freedom*, en el que tuve el honor de colaborar. Se trataba de rendir un homenaje a la figura del ex-Ministro de Hacienda y ex-Presidente del Banco de Austria Dr. Kamitz, quien se había visto obligado a abandonar este último cargo, a consecuencia de un ataque cerebral que le dejó prácticamente inutilizado para toda clase de trabajos. Se aprovechó tan emocionado motivo para recoger una serie de ensayos de hombres conocidos, que han jugado un papel importante en el desarrollo de la cooperación mundial hasta el presente, y de otros autores a los que les interesa el futuro de la economía internacional. Entre estas colaboraciones figuran las de Erhard, Abs, Hemminger y Müller-Armack, por Alemania; Giscard d'Estaing y Rueff, por Francia; Hauge, Roosa y Hayes, por Estados Unidos de América; Carli y Ossola, por Italia; Scheweizer y Schaefer, por Suiza; Wallenberg, por Suecia; Schmitz, por Austria; Laszlo, por Hungría; Miljanic, por Yugoslavia; Zolotas, por Grecia, y Navarro Rubio, por España. He de agradecer, singularmente, a los organizadores que no les impresionasen lo más mínimo los ecos del famoso caso Matesa. Antes al contrario, creí advertir un propósito de satisfacción personal que merece mi más sentido reconocimiento.

Respondí a la invitación buscando, con mi mejor deseo, un tema en torno al cual pudiese ofrecer la lección magistral de mi experiencia política como gobernante. Y que fuese, además, de interés común. Lo titulé *Political Factors Conditioning the Progress of the Economy*, y hablé continuamente de los graves peligros de la inflación, por razones estrictamente políticas. Siempre he creído que la inflación es la amenaza más grave que existe en el mundo occidental. Creo comprender sus problemas, y los atacé de frente, con toda profundidad, señalando a las claras que la principal causa de todos los descalabros sufridos hasta el momento—y de los que estábamos abocados a sufrir en lo sucesivo, todavía con mayor intensidad y extensión, si no lo remediábamos adecuadamente—era, sin lugar a dudas, la debilidad

de todos los gobiernos de nuestro viejo sistema democrático, que impedía plantear las soluciones en sus verdaderos y reales términos. No anduve con eufemismos. A mi entender, los gobiernos y los partidos estaban jugando a combatir la inflación con el espíritu claudicante propio de un auténtico vicio político. No se podía ni debía aceptar la cómoda postura de que se trata de un fenómeno general, inevitable e indómito. Esto es tanto como resignarse a morir en consciente inconsciencia.

Las frases fueron claras, duras, directas, dirigidas a la «elite» financiera del mundo democrático, con el deliberado propósito de poner en entredicho la actitud contemporalizadora que en todas partes se observa. La democracia que se vive en los países más adelantados del mundo occidental podrá tener todas las ventajas que quieran sus defensores en orden a la expresión libre de ideas, opiniones, críticas al Gobierno, organización de la oposición y de los partidos políticos, elección de representantes, juego abierto de los parlamentos, etc., etc.; pero lo que no se puede decir, por mucho entusiasmo que se ponga en el elogio, es que el juego democrático demuestra asimismo una especial idoneidad para combatir la actual inflación. Cuando leí este comentario, hace poco, en un artículo publicado en el *ABC de los Domingos*, me propuse rebatir semejante dislate la primera vez que cogiese la pluma. No se puede, a mi juicio, confundir de este modo la sana opinión de las gentes. Desgraciadamente, el juego democrático de los países occidentales—se quiera o no se quiera—está sometido a tales condicionamientos que no puede, en modo alguno, enfrentarse decididamente con los actuales problemas que presenta la inflación persistente que padecemos. Aquí está lo más grave y profundo del problema.

Los grupos políticos juegan, desgraciadamente, de modo sistemático a sacar ventaja de todas las situaciones. La lucha por el poder justifica todas las actitudes y marca las preferencias. Para lograr el éxito en unas elecciones o conseguir el previsible relevo de un gobierno, los políticos oficiantes no dudan en agravar un problema económico coyuntural, retrasar una solución equilibradora e incluso ambientar consciente o inconscientemente un clima de crisis. La política —la pequeña política— afirma siempre su prioridad; es antes que nada. Para la táctica de conquista del poder, los problemas económicos juegan como un elemento más de combate. Y estos desafueros se pagan muy caros.

Los gobernantes de nuestras viejas democracias están obligados, bajo pena de muerte política, a no contrariar la opinión pública que los sostiene. Necesitan sus votos. Tienen que ser extremadamente cautos. Aunque vean los problemas y adviertan las catástrofes —si las advierten a tiempo— se ven muy seriamente dificultados para corregirlas. Las medidas anti-inflacionarias están siempre expuestas a una crítica negativa. Exigen aceptar contrariedades con anticipación, sacrificar popularidades. Y no parece ser éste el espíritu de la política de partido.

Pero es que, además, la táctica inflacionista se presenta muy tentadora para un político que sólo piensa en salvar con la mejor fortuna el momento presente. La inflación sigue siendo, por ahora, el modo más hábil que existe para no contrariar las presiones de los grupos dominantes —empresarios y sindicatos—, dejando satisfechos a los votantes mejor organizados —en sus constantes peticiones de subidas de precios— a cambio de trasladar las cargas a los que no cuentan políticamente demasiado —los consumidores, por ejemplo— porque no han podido o sabido, aún, organizarse. Es el medio más hábil que existe de satisfacer a corto plazo los deseos de la población más inquieta. Una buena táctica de ganar votos eliminando por el momento los problemas.

Es inútil pensar en que estos problemas los pueden resolver los omnipotentes parlamentos. Están invalidados, desde un principio, por sus compromisos electorales. Los problemas se ven desde su lado político —el de la significación partidista de cada uno, naturalmente—. Aparte de que una institución de esta naturaleza carece de la aptitud suficiente para desentrañar las consecuencias operativas de las soluciones económicas. Churchill —uno de los parlamentarios más conspicuos de todos los tiempos— no dudó en dictar contra los actuales parlamentos esta sentencia lapidaria: «Los parlamentos de todos los países se han mostrado totalmente inadecuados para resolver los problemas económicos». Y en una encuesta celebrada en Milán en 1964 sobre «parlamento e partiti como problema attuale della democrazia», se llegó a la conclusión de que el ajuste de la economía es para el parlamento un problema insalvable.

Tampoco se puede pensar seriamente en que los gobiernos son capaces de dominar esta situación. La experiencia sobre este delicado asunto no puede ser más triste. Las inflaciones de los años 50 y 60 fueron todas convencionales, conscientes o provoca-

das, en el sentido más defectivo de la palabra. Para resolver peticiones políticamente inquietantes, no se dudaba, como mal menor, en hacerlo a costa del presupuesto e incluso de la moneda. Los que piensen que con el actual «status» politocrático de las viejas democracias se puede atacar responsablemente este problema, pueden abrigar todas las ilusiones que reclame su explicable deseo por defender un sistema en el que tienen puesta toda su esperanza. Pero en modo alguno pueden hacer una llamada a la historia reciente de esos grandes países, que algunos presentan como ejemplos paradigmáticos, porque si se ponen a indagarla, experimentarán el más lamentable de los desengaños.

En el momento presente las dificultades son todavía mayores. Hasta ahora se había aceptado la idea de que había una inflación intermitente que podía atacarse con la conocida técnica del «go and stop» —«marcha y parón»—; pero en este momento la inflación que padecemos ya no es intermitente, sino persistente —y, por si fuese poco, se ha unido a la convencional inflación de demanda una acusada inflación de costes—. Por mucho que se quiera confiar en la virtualidad sanatoria de los viejos regímenes del mundo occidental, no encuentro, en las actuales circunstancias, razones válidas para pensar, prudentemente, en que pueden atajar la crisis que estamos sufriendo sin modificar sustancialmente su actual «status» político y económico.

Estas fueron, en síntesis, las ideas que expuse en mi artículo. Me cabe la tranquilidad de saber que hice cuanto estaba de mi parte para enfocar el problema. Denuncié con toda claridad, por escrito, la preocupación que continuamente hube de exponer, por otro lado, a mis compañeros del «Gran Club» de Banqueros Centrales de Basilea, escuchando, por cierto, respuestas anecdóticas y lamentaciones particulares, tremendamente críticas acerca del miedo que producía en el ánimo de los gobernantes, el simple anuncio de cualquier medida que pudiese molestar a sus protectores políticos.

No se puede ocultar este pánico gubernamental porque presenta caracteres enfermizos y descubre la principal causa de la mayor parte de los males que padecemos. Es duro el juicio; pero no puedo retirar la acusación. Antes al contrario, creo que debo reiterarla todavía de un modo más agudo, hasta lograr que se analice suficientemente.

Observo que a los políticos no les resulta nunca oportuno

hablar de este tema. Quizás esté reservado el cuidado de esta denuncia a los antiguos gobernantes —conocedores directos del problema—, que por unos u otros motivos no estamos llamados a desempeñar cargos públicos en este preciso momento. Si es así me constituyo en vocero de esta preocupación y manifiesto nuevamente con toda serenidad y firmeza: que continúa de un modo alarmante por parte de los gobiernos esa fácil política de pervivencia y prestigio a costa del gasto público, peligrosamente desorbitado, incitando un género de vida superior al que permiten las razonables posibilidades; que, asimismo, los gobiernos vienen consintiendo la celebración de pactos entre los sindicatos y los empresarios de forma que genera por autoinflación un alza continuada de los precios; que las autoridades económicas adoptan las medidas correctivas de la inflación, casi siempre en «decalaje», en espera de que llegue el tiempo político, de que madure la sensibilidad de las gentes. Estas tres observaciones —sin necesidad de cargar más las tintas— bastan, a mi entender, para llegar al convencimiento de que no hay posibilidad razonable de corregir la inflación, a no ser que la política imperante cambie por completo de planteamiento.

Desde luego, inflación producida por la elevación de costo del petróleo, no tiene nada que ver con este viejo problema—. Aparte de que a estas alturas ya debiera estar totalmente compensada—. Ni las otras inflaciones específicas que se han producido a lo largo de la historia, tampoco.

La inflación actual presenta, desgraciadamente, los mismos caracteres que la del Imperio Romano. Se trata de un auténtico vicio político —o si se quiere, de una enfermedad política—. Una especie de cáncer de médula que está en la misma entraña del juego de poderes y produce una grave disminución de defensas del poder público. Me ha tocado vivir de cerca las inflaciones que se han producido en el mundo occidental, en los últimos años, durante un período de tiempo más que suficiente para formar prudente y acabado criterio. He tenido la posibilidad de conocer interioridades políticas inéditas, y puedo decir, por ello, con suficiente conocimiento de causa, que la inflación es, ante todo, un signo revelador de la impotencia gubernamental. Todo lo que no sea ver el problema en toda su cruda verdad, viene a desfigurarle. No lo plantea. Y problema mal planteado no puede ser problema resuelto. Ninguna de las opciones que se presentan ac-

tualmente a la consideración política —democracia de viejo estilo y socialismo— pueden ofrecer soluciones esperanzadoras. Vamos a verlo.

## LAS HIPOTESIS DEL CAMBIO POLITICO

El ex-Ministro y Académico D. Gonzalo Fernández de la Mora, pronunció este año una magnífica conferencia sobre el tema «Cambio político e ideología». Un tema muy suyo, para el que se encuentra especialmente preparado. Está en la misma línea de su conocido libro sobre «La crisis de las ideologías» y de su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencia Morales y Políticas, que tituló «Del Estado ideal al Estado de Razón».

De su brillante exposición recojo, en síntesis, lo siguiente: El mundo es cambiante. El cambio histórico se inserta en el cambio cósmico. El progreso es ascendente —aunque existan algunas involuciones—. Hay una dinámica de la estratificación social: se modifica la función de la mujer, de la familia, de las minorías, de las clases, de los núcleos de población y en otro orden de ideas se modifican también los hábitos de consumo, de dominación y de ocio. Se alteran las creencias, las ideologías, el código de valores y la propia concepción del mundo. Cambia la cultura, principalmente con los avances de las ciencias—. Sus instancias son puramente teóricas, pero capaces de desencadenar profundas transformaciones sociales—. Cambia la economía en sus estructuras de producción, distribución y consumo. El desarrollo progresivo constituye el lema dominante de la política económica actual. Y cambia, por último, la política, no sólo en los programas de Gobierno, sino también en la propia estructura del Estado.

El Estado moderno ha estado evolucionando de un modo constante a impulsos de un proceso de racionalización que le ha llevado a abandonar toda suerte de presiones ideológicas, hasta aceptar irremisiblemente unos esquemas de pura razón. Las líneas cardinales del proceso han sido las siguientes: especialización de funciones; institucionalización; ampliación de competencia; objetivación de las normas; pérdida de la confianza en las ideologías, y pragmatización de la legitimidad —cualquier situación se justifica con un buen balance político por muy discutida que lo fuese en su establecimiento originario—.

Se podrán discutir estas constantes, porque no tienen, desde luego, valor apodíctico—. A mí personalmente me parecen ciertas—. Pero sean éstas u otras las líneas que marcan la evolución del Estado moderno, lo que parece bastante claro es que han servido para aproximar e incluso confundir, a veces, las posiciones de regímenes políticos aparentemente dispares y hasta de partidos que se presentan como contrapuestos. A la hora de enfrentarse con los problemas, todos vienen sustancialmente a emplear los mismos modos y medios. Lo mismo da que los Gobiernos se llamen conservadores que socialistas, de derechas que de izquierdas. Los Estados modernos —cualquiera que sea su caracterización externa— coinciden siempre en los mismos planteamientos racionales, todos llegan, en definitiva, a realizar sus planes conforme a una misma mentalidad práctica, como si tuviesen un mismo denominador común.

Ahora bien, existen todavía —y posteriormente existirán siempre— unos apriorismos políticos diferenciales, unas etiquetas que determinados grupos se ponen para distinguirse de los demás, unas hipótesis de que parten para conseguir sus fines. Actualmente hay dos hipótesis convencionales que vienen a indicar la trayectoria que piensa seguir un Régimen determinado: la hipótesis democrática y la hipótesis socializadora. Ambas se adaptan a las constantes del Estado moderno, pero de una forma que Fernández de la Mora no duda en calificar de patológica.

La democratización avanza —a su juicio— hacia el bipartidismo, colocando a las minorías en una posición falta de todo sentido político, en ocasiones por defecto y a veces por exceso —como cuando un pequeño partido impone condiciones dirimentes en una coalición gubernamental que reclama su apoyo—. La debilitación del poder —a causa de la lucha partidista— muestra una clara proclividad hacia el presidencialismo, en detrimento de la soberanía parlamentaria. La tecnificación de las leyes desvirtúa la extracción popular de los parlamentos; y la especialización de funciones, la difusión inorgánica del poder. Queda tan sólo incólume, en buena crítica, el reducto de la fiscalización pública, la prestación del consenso y la defensa de las garantías jurídicas individuales. No sé hasta qué punto basta con este reducto para mantener intocable el viejo Estado democrático. A mi entender, presenta un claro y grave vacío necesitado de remedio adecuado.

La hipótesis de la socialización tiende a convertir al Estado

moderno en el titular efectivo del quehacer nacional. Y cuando no puede conseguir este fin de un modo absoluto, intenta, al menos, el intervencionismo oficial en todos los órdenes de la vida —información, cultura, deporte, etc.—, especialmente en el económico. Es una socialización de vía estrecha, que juega en las condiciones más insólitas y suele ser fuente de toda suerte de abusos, deformaciones y derivaciones insospechadas. El fenómeno patológico más preocupante del socialismo en su ineficacia. Si quiere conseguir el bien común, al compás del progreso moderno, no tiene más remedio que procurarlo de un modo indirecto: aumentando los estímulos empresariales o privados. El Estado se hace cada vez más grande, con la acaparación de funciones; pero no más fuerte. No gana en autoridad. No se prestigia —sino todo lo contrario—, suscita las críticas más duras que se pueden hacer al poder público: las que lo empequeñecen.

En fin, ninguna de estas dos trayectorias políticas ofrece, como se ve, perspectivas alentadoras. Y lo que desde luego no resulta, en modo alguno aconsejable, es la mixtura de las dos, porque viene a salir un engendro político que recoge lo más forzado —y, por consiguiente lo peor— de las distintas experiencias.

Cualquier espíritu constructivo se queda perplejo y confundido ante una discusión encerrada en el marco de estas dos hipótesis convencionales. Resulta siempre decepcionante. Y, sin embargo, como no se ofrecen otras alternativas, en esta triste duda viene a enredarse la disquisición política en los últimos tiempos. ¿Democracia? ¿Socialización? Mi postura personal ante este supuesto dilema se resume en una pregunta que hice a un grupo de amigos reunidos con el propio conferenciante: «¿Y la inflación, qué?». Fernández de la Mora no se había planteado, ciertamente, este problema. Su discurso tan sólo buscaba recoger unas situaciones y analizarlas como simples hechos sociológicos sin exponer ninguna tesis de concepto. Por esta razón mi pregunta tenía toda la fuerza de una piedra lanzada en la brillante cristalera de un ventanal académico.

Esta pregunta me la hago también muchas veces cuando tanto se habla de asociaciones, partidos, figuras..., de creación o supresión de Ministerios, de planes de futuro, confiados a la buena o mala habilidad de los politócratas de oficio. Todo esto es, lógicamente, digno de atención, pero siempre que se conceda mayor interés al problema de los problemas. ¿Y de la inflación, qué?

Por ninguno de los rumbos que quieren tomarse se ve el horizonte; ninguna de las pretendidas soluciones arroja luz. Los dos esquemas —democrático y socializador e intervencionista— son francamente negativos, torpes, delicuescentes, demoledores. Hace falta considerar otras hipótesis, porque las hay—si es que se quiere encontrar serenamente y con toda firmeza una solución esperanzadora—.

Quiero señalar, a este respecto, la poca importancia que merece, por lo común, el problema de la inflación a la inmensa mayoría de los definidores políticos de nuestro país. Muchos de ellos hablan del tema a lo sumo de pasada, y no dejan de ser una voz más en el coro de las lamentaciones. Hay quien piensa que con decir crudamente que las cosas están muy mal, ya le ha dado al tema el tratamiento que merece. Se echan de menos las necesarias propuestas operativas. No tendrá mi voto en estas circunstancias, ni mi modesto consenso cualquier político que no muestre un conocimiento suficiente del problema y un propósito inequívoco de cambiar a fondo el actual planteamiento. Porque parece claro que si no se modifica profundamente la estrategia política en este punto concreto, difícilmente se podrá mantener una situación estable.

Solamente pienso hacer unas preguntas a modo de tanteo previo: ¿Vamos a seguir con los pactos leviatanescos entre empresarios y sindicatos, con ocasión de los convenios colectivos? ¿Van a existir las llamadas «huelgas salvajes»? ¿Seguiremos por la pendiente de un «socialismo de facto», con su sistema de tasas, concesiones administrativas y controles? ¿No se nos ocurre nada distinto? Me voy a permitir hacer una pequeña glosa sobre cada una de estas cuestiones.

La actual política de pactos colectivos descubre un fenómeno de ingentes proporciones, capaz de conmocionar el orden económico más sólido y estable. Las fuerzas organizadas de los empresarios y los trabajadores llevan a remolque a los hombres, las ideologías y los partidos; juegan entre sí como auténticos leviatanes; miden su potencia, calculan sus posibilidades y, llegado el caso, luchan o pactan.

Debemos reconocer que el pacto, en sí, no es malo. Lo malo está en que sus autores—quienes lo hacen—se olvidan de los demás. Y los demás son todos los hombres y valores—el bien común, entre ellos—que no están directamente implicados en

el acuerdo. El Estado se encuentra entre dos frentes, seriamente preocupado en evitar las alteraciones económicas, de un lado, y de otro, las claras amenazas de huelga. Y cuando se produce un acuerdo, lo celebra políticamente, como si fuese un triunfo. Pero es que con muchos de estos «triumfos políticos» la Economía se hunde. ¿Se ha pensado bien en que con esta política, la inflación se genera dentro del propio sistema?

¿Se van a consentir las huelgas salvajes? Un sindicato a la antigua es especialmente apto para ser instrumento explosivo de fuerzas inconfesables, sobre todo si tiene aceptado un contrato de enfeudamiento con aquellos partidos políticos que luchan violentamente por la conquista del poder. Este es un problema que se sale de la esfera laboral para entrar en la del orden público. No parece debieran tenerse en este punto demasiadas contemplaciones, porque puede saltar un país hecho pedazos.

Ocurre, sin embargo, que no puede mantenerse tan sólo una política vigilante y dura, porque, en verdad, merecería el calificativo de reaccionaria. Hay que plantear el problema erradicándolo dentro del ámbito empresarial—que es donde alcanza su determinación más real y precisa—, y darle salida positiva. A mi entender, la solución consiste en un buen sistema de participación de los trabajadores en la vida, programas y beneficios de la empresa—que suponga una transformación efectiva del viejo sistema capitalista—. Insistiré más sobre este punto cuando llegue el momento de hablar acerca de las soluciones. Ahora únicamente apunto que, para mi personal apreciación, el problema tiene salida; y que, en cambio, lo que no creo tenga salida des ninguna clase, es el mantenimiento de una situación en la que puedan llevar la iniciativa los que busquen principalmente el modo de emplear con éxito el demoledor procedimiento de las huelgas salvajes.

¿Seguiremos por la pendiente de un socialismo *de facto*? Los países del mundo libre, aturdidos por las graves amenazas de la inflación, se olvidan hasta de su propia razón de ser—la suprema razón de la libertad—y encajan una serie de expedientes administrativos—escandallos, precios de tasa, cupos, controles, etcétera—típicamente propios de cualquier Estado socialista. Bien está que en alguna ocasión extrema se llegue al convencimiento de que no hay más remedio que aceptar unas determinadas medidas excepcionales. Pero no se puede estar convencido de este sistema corrientemente, sobre todo con la frecuencia en que incu-

rren los gobernantes del mundo occidental. (Da la impresión de que se han olvidado del telón de acero.) Se pueden presentar ocasiones en que la intervención se prescriba como una medicina necesaria. Pero hay que advertir seriamente sobre los estragos que produce en la vida del mundo libre una dosis excesiva. La intervención ha de ser siempre transitoria, una excepción—un foco aislado—; pero nunca un sistema permanente, un clima—una endemia—. Puede morir por esta causa la libertad económica y social. Y tras ella, la libertad política.

Se podrían hacer muchas preguntas más sobre los graves defectos enquistados en los viejos sistemas políticos. Pero creo que ya es bastante. ¿No se nos ocurre nada distinto? A mí, desde luego, sí. Creo sinceramente que, para nuestra buena esperanza, hay algo más que esas dos hipótesis de cambio, entre las que debate sus sinsabores este mundo atormentado por los ataques de una inflación galopante. Existen otras posibilidades que responden a demandas históricas de auténtica reivindicación social; se afirman en sólidos argumentos dialécticos; recogen las inquietudes más prometedoras de la realidad; introducen la política en campos más profundos, y brindan nuevas y claras posibilidades para resolver confiadamente el problema concreto de la inflación. Pero esta materia requiere otro artículo.

## LA HORA DE LAS GRANDES DECISIONES

El problema de la inflación nos tiene a todos un tanto angustiados. Todos tenemos muchas ganas de que salga una especie de DDT económico que mate fulminantemente el morbo inflacionista. El anuncio de cualquier medida de este tipo despierta, como es lógico, el más vivo interés. No es extraño que despierte vivo interés, por ejemplo, la «serisette», fórmula inventada por Jean Serisé, arbitrista francés del grupo Giscard, con el fin de asestar un golpe mortal a la inflación. La Prensa recogió la noticia con los titulares más llamativos y esperanzadores: «En busca de nuevas fórmulas». «Atacar la inflación desde dentro de la empresa». «Un objetivo: yugular la inflación a nivel microeconómico». Me gustó su tono directo y agresivo, porque así es como debe tratarse este problema. Merece, por ello, reconocimiento y aplauso.

La «serisette» consiste, concretamente, en penalizar los juegos inflacionistas de las empresas, metiendo un inspector del Fisco que vaya persiguiendo, mes a mes, los movimientos atípicos y abusivos. Según mi personal apreciación, esta fórmula peca de ser excesivamente inspectorista. No tengo mucha fe en el inspectorismo—sobre todo de tipo latino o sajón maleado—. No lo aconsejo. Es fuente de inevitables desviaciones y, además, a la hora de la verdad no funciona con la necesaria eficacia. Prefiero un tratamiento sectorial, que bien modulado puede incidir de modo suficiente y realista en la vida de cada empresa. A lo sumo, recomiendo la inspección cuando se trata de grandes empresas. Esta es, al menos, mi personal experiencia de la Reforma Tributaria de 1957. Ahora bien, la fórmula, en este caso, es lo de menos, porque la «serisette», por encima de su finalidad secante de la actual inflación, comporta, ante todo, un gran mensaje para la política económica del futuro: atacar la inflación metiéndose dentro de la perspectiva empresarial. Y este enfoque reclama, a mi juicio, una atención muy meditada.

Desde la postguerra, la lucha contra la inflación se ha planteado, casi exclusivamente, desde la perspectiva del Estado. Hemos estado viviendo «a lo Keynes» durante muchos años: discutiendo en el plano de las grandes magnitudes y de las medidas globales. No se olvide que Keynes fue el verdadero mentor del sistema de Breton Woods, difundido a lo largo y ancho de todo el mundo por unos magníficos funcionarios puestos al servicio de los Organismos Internacionales. La política macroeconómica—nadie lo negará—atacó con eficacia los problemas de reconstrucción de la Europa destrozada, y estableció un orden del que son claro exponente los Planes de Estabilización y Desarrollo de los años 60. Pero hemos de reconocer que en las actuales circunstancias no resulta suficiente—ni a veces aconsejable—para atajar las causas de la actual inflación. El mal ha profundizado de tal modo que apenas si lo rozan las medidas correctivas propias de un tratamiento generalizado.

Las medidas de carácter global presentan, por otro lado, el claro inconveniente de la ejecución indiscriminada. Si no se adoptan las precauciones necesarias, son auténticos «palos de ciego». Pueden castigar duramente a las empresas más dinámicas e inversoras; casi siempre suelen descargar los golpes contra las empresas medias y pequeñas, desamparadas por los grupos finan-

cieros tutores; y producen, en definitiva, un fundado temor, que viene a desanimar la promoción de la demanda.

Pero es que, además, con la actual política, las empresas se han constituido en las mayores propagadoras de la inflación: transfieren fácilmente a los precios los aumentos de coste; aprovechan cualquier oportunidad para sobrecargar un porcentaje cauteloso, las más de las veces abusivo; descuidan casi por completo la lucha competitiva con los otros oferentes; los niveles de productividad bajan; y el empresario tan sólo busca, en suma, el vicioso recurso de las constantes elevaciones de precios. Mientras existe este foco inflacionario, es un tanto inútil intentar cualquier remedio de factura general porque resultará periférico. Hay que meterse dentro de la problemática empresarial para tratar de extirpar el mal en sus raíces. La «serisette» va directamente a la causa. Mete la cuña en la misma entraña del problema. Pero resulta, a mi entender, demasiado corta. Con un simple toque inspectorista, por muy acertado que sea, difícilmente se puede dar por bien acabada una operación que quiere extirpar ramificaciones muy extensas y profundas. Hay que operar en todos los planos: económico, social y político.

En el orden económico hay que procurar, ante todo, un mínimo de seguridad en los planes empresariales. Se habla mucho de seguridad social y no se habla nunca de seguridad económica. No se trata de evitar —sería absurdo en el mundo libre— los riesgos típicamente empresariales —atonía de la demanda, estrechamiento del mercado, etc., etc—, que siempre serán propios y exclusivos de cualquier negocio, sino los peligros de la actuación correctiva o incluso represiva de los propios gobiernos. Una cosa es el riesgo comercial y otra el riesgo administrativo. Continuamente están los gobiernos dictando nuevas disposiciones en materia de créditos, divisas, importaciones de materias primas o de capital, exenciones o desgravaciones tributarias, etc., etc., que vienen a introducir serias modificaciones en los planes empresariales. Sobre unos condicionantes tan movedizos, no es fácil establecer previsiones fiables por parte de ningún empresario. Y si a esto se añade el posible arribo al poder de un nuevo gabinete ministerial con talante revisionista, o los avatares de cualquier cambio político más profundo, se comprenderá fácilmente que esta demanda de un mínimo de seguridad económica debe constituir, lógicamente, en el momento presente, una exigencia muy explicable.

La única fórmula que puede garantizar un *mínimum* de seguridad económica para los planes empresariales, es la concertación. Un acuerdo respetable entre el Estado y las empresas, donde éstas vengan a conseguir la promesa de que no se alterará el «status» vigente, durante un tiempo determinado, a cambio de ajustar sus programas a las exigencias establecidas por el Estado en su política de Desarrollo y Estabilización. Es un «do ut des» eminentemente concreto y práctico, que podrá discutirse siempre en orden a las ventajas o compensaciones que establece, pero que en todo caso viene a fijar posiciones: a recetar estabilizaciones parciales. Basta con unos cuantos conciertos decisivos —con grandes empresas o sectores económicos determinados— para dar la tónica a todo el ambiente.

No tema nadie que con este planteamiento se presente ninguna innovación temeraria. En mayor o menor grado, en todos los Estados modernos, las grandes empresas, especialmente las multinacionales, acaban por concertar sus objetivos con los del Estado. Son frecuentes los pactos sobre divisas, materias primas, nacionalización progresiva de la producción, porcentajes de exportación de los productos, etc., etc. En el orden administrativo interno, cada vez hay más conciertos —comerciales, financieros, fiscales, etc.—. Nadie negará que la política actual acepta la concertación; pero con espíritu condescendiente, sin mucho entusiasmo, como si fuese una salida de emergencia, sin querer darse cuenta de que únicamente por este camino se ataca el mal en sus raíces: se puede lograr, de veras, la necesaria estabilización.

El segundo plano en el que deben operar las soluciones es el social. Para garantizar un mínimo de seguridad económica, hay que pensar necesariamente en un mínimo de estabilidad laboral. No nos engañemos con falsas esperanzas; todas las previsiones pueden derrumbarse estrepitosamente, minadas por el ataque certero de unas cuantas «huelgas salvajes». Las huelgas salvajes se producen casi siempre dentro de las grandes empresas, porque se prestan singularmente al juego destructor de las fuerzas políticas. Y es ahí, en la entraña de la empresa, donde el problema debe despolitizarse y cambiar de signo.

La solución es de todos sabida. Consiste en poner el mingo en su sitio. En interesar eficazmente a los trabajadores en la gestión y en los resultados de la empresa. No hay otra posibilidad. Hay que meterlos entrañablemente en la vida de la em-

presa, implicarlos interesadamente en los planes y proyectos. Es-tablecer una perfecta simbiosis entre la programación y el convenio laboral. La programación ha de apoyarse congruentemente en el convenio, y el convenio en la programación. Han de ser correspondientes. Hace falta, por ello, un estatuto «ad hoc» para cada empresa —la gran empresa o sector económico, se entiende—. En suma, hay que poner también el «cascabel» a los sindicatos para que no enreden con los asuntos propios de cada empresa.

Las grandes empresas, si quieren conseguir la interesada atención de sus trabajadores, han de ensayar, también, la ruptura del sistema socialista de seguridad social. Con este tipo de política oficial atractiva que se viene siguiendo, el Estado asume la gestión de todos los problemas protectores del mundo del trabajo —los más gratos desde el punto de vista político— mientras deja descarnadas las relaciones del trabajador con su empresa, hasta reducirlas casi exclusivamente al planteamiento de cuestiones contenciosas, cuando no litigiosas. No es extraño, puestas las cosas de este modo, que la empresa esté por dentro dividida, enfrentada y muy recelosa.

La empresa capaz reclama autonomía y respeto suficientes para un quehacer propio, relegando al Estado y a la Organización Sindical a una posición de suplencia. Lo contrario supone una injerencia a todas luces inconveniente; esteriliza la participación de los trabajadores: único modo de cambiar positivamente el clima que hace posible la fácil ambientación de las huelgas salvajes.

Y existe otro tercer plano el político. Todo quedaría en el aire —concertos económicos, convenios laborales programados, etcétera— si no se garantizase políticamente su cumplimiento. Hay que institucionalizar la solución de los conflictos. No pueden quedar a merced de las partes. Los problemas deben tener una salida prevista mediante un buen sistema de arbitraje. Hay que evitar esas «salidas» de emergencia que conducen casi de modo automático a una subida desmesurada de los precios. Si no se ataja este problema, la inflación seguirá siendo una amenaza insalvable, por razones estrictamente políticas.

Hay aquí claramente un problema de autoridad. Los gobiernos van siempre a remolque de los grupos dominantes —capitalistas y sindicatos—. Impresiona la debilidad del poder cuando

los problemas se plantean directamente por los grupos de presión. Nos encontramos, sistemáticamente, con unos gobiernos acomplejados, que no saben cómo abordar los problemas. Es una situación que nadie ha logrado resolver, satisfactoriamente, en ningún país del llamado mundo libre. Tenemos que pensar, por lo tanto, en un nuevo planteamiento político. Hay que introducir en el juego a las fuerzas que actualmente están marginadas —los consumidores, por ejemplo— para colocarlas en igualdad de posiciones en relación con los otros interesados en el pleito social. Sólo de este modo se podrán frenar oportunamente las demasías de los empresarios y los trabajadores, sobre todo cuando se ponen de acuerdo en resolver sus diferencias a costa de los demás. Nadie negará que es ésta la solución más democrática. La única democrática, a mi entender.

Al plantear esta cuestión, nos encontramos, sin duda alguna, con el punto neurálgico del problema. El Estado debe tener mayor apoyo, buscar un consenso más amplio para sus decisiones. Al mismo tiempo, si quiere gobernar con fortaleza, razón y prestigio, ha de ordenar el repliegue de la Administración Pública hacia una posición rectora, con abandono de todas aquellas funciones gestoras que no se le son propias. Ha ido demasiado lejos. Va en ello el ser o no ser de un Estado libre.

Cualquier mente simplista resolvería, quizás, esta dificultad con el valiente gesto de dar un puñetazo encima de la mesa. Pero el problema envuelve, a mi entender, cuestiones más enjundiosas y complicadas; salta por encima de su aparente simpleza: denuncia la quiebra de todo un sistema político. La inflación es una causa de segundo orden. El mal es más profundo. Tirando de los hilos de la crisis actual, se llega a descubrir la clara necesidad de hacer un replanteamiento a fondo del «status» político sin demasiados miramientos.

## HACIA UN NUEVO «STATUS» POLITICO

Todo cuanto se dice en este artículo he procurado someterlo al contraste de otras opiniones —reuniones con empresarios, trabajadores, estudiosos en la materia, e incluso sesiones académicas—. He querido escuchar cuantas observaciones pudieran resultarme válidas. La verdad es que se han hecho pocas rectificacio-

nes de fondo. En todos estos encuentros, el problema ha saltado inevitablemente, del terreno económico al político. En seguida nos olvidamos de la «serisette» e incluso de la lucha directa contra la inflación. Preocupaban especialmente las repercusiones políticas, por lo que tienen de novedoso todas estas fórmulas. Creo de interés ofrecer una síntesis de mis aclaraciones a este respecto.

## ECONOMIA CONCERTADA

En la concertación se encuentra el punto de equilibrio de dos exigencias que hasta ahora se presentaban como contrapuestas. De un lado, la necesidad de que el Estado rija la Economía. De otro, el debido respeto a la libertad empresarial. El Estado puede y debe establecer condicionamientos económicos; pero dejando, siempre, a las empresas la posibilidad de aceptarlos o no aceptarlos.

La libre iniciativa debe ser la sustancia económica del mundo occidental. Hay que dar una réplica certera al socialismo; lanzar un reto, precisamente en este campo, al intervencionismo administrativo, que viene ganando cada vez más terreno al revuelo de la crisis económica que estamos padeciendo. No podemos caer irreflexivamente en el «fatum» de un socialismo, que empieza por mixtificar la economía con unos cuantos controles de emergencia y acaba por dominarla de un modo que puede resultar irreversible.

La economía concertada no es ni liberalismo ni socialismo. Ni esa mezcla de los dos, en que consisten los modernos sistemas del mundo que llamamos libre. Es un orden económico nuevo.

## EMPRESARISMO

Debe establecerse de una vez, en el mundo libre, un sistema empresarista, que venga a corregir los viejos abusos del capitalismo clásico y del socialismo de Estado.

En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas —que lleva, precisamente, este título: «El Empresarismo»— razoné sobre la necesidad de esta evolución del

siguiente modo: Todas las culpas que se vienen cargando al capitalismo y al sindicalismo provienen de no haber tratado bien a la empresa. Se han servido de ella para fines propios; la han despojado, a veces, de su contenido específico, dejándola descarada; han contribuido a la desunión de sus elementos, si no la han fomentado, y no han atendido, por ello, convenientemente, sus exigencias integradoras. Por esta razón, la conformación de la empresa a su espíritu natural —un hecho al parecer tan simple y lógico— supone, por efecto derivado, la reforma total del capitalismo y un giro radical en el viejo sindicalismo.

La moderna concepción de la empresa está deshaciendo a grandes pasos el montaje del viejo capitalismo. En la misma entraña del sistema capitalista se ha incubado el espíritu empresarial que viene larvando desde hace tiempo una verdadera metamorfosis. Donde mejor se ve —de una manera más aguda— la transformación que se está experimentando en el viejo sistema capitalista, es en la llamada «revolución de los gerentes». Se está erosionando gravemente el predominio de los consejos de administración capitalistas. Cada vez va adquiriendo mayor relevancia el equipo directivo. Y lo curioso de este fenómeno es que también se está produciendo la misma metamorfosis, «mutatis mutandis», en el mundo comunista —respecto al capitalismo de Estado, naturalmente—. Disponemos de experiencias cuajadas de esta evolución en los dos grandes mundos. Los sistemas económicos del área capitalista y del mundo comunista han venido a polarizar sus inquietudes en el mismo punto: la defensa de la empresa como tal, desligada de sus dueños patrimoniales. Hay como una fuerza racional práctica y reivindicatoria que clama contra toda clase de abusos o entorpecimientos, ya sean legales o simplemente convencionales.

No se comprende fácilmente cómo a estas alturas todavía no se ataca con decisión el problema de la reforma de la empresa. No tiene por qué hacerse de un golpe, ni de una manera general y dogmatizante; antes al contrario, aconsejo acompañarla a las demandas de la realidad: pero es que la realidad es cada vez más acuciante. En una conferencia pronunciada en Barcelona en el año 1973, apunté siete puntos concretos: Empezar con el tratamiento de los problemas específicos que presentan las grandes empresas, especialmente las multinacionales. Darse cuenta de que estamos en la era de la programación y dar a este fenómeno

el tratamiento legal adecuado. Tomar en serio la revolución de los gerentes y procurarles un estatuto —entre otras razones porque conviene limitar sus pretensiones—. Convencer a los capitalistas de que aseguren pronto una posición de control efectivo sobre la marcha de la empresa. Buscar a fondo la participación de los trabajadores. Definir la posición del Estado frente a las grandes concertaciones. Y hacer que el Gobierno predique con el ejemplo, experimentando la reforma en las propias empresas nacionales. No pretendo que estas cuestiones sean todas, ni las mejor buscadas, ni, sin duda, las únicas que deben considerarse. Pero indican, a mi juicio, con suficiente insinuación, las razones positivas que existen para ocuparse de este problema.

El mundo avanza por este camino. Sinceramente entiendo que el nuevo orden económico no puede llamarse ni capitalista, ni socialista; ha de tener un signo claramente empresarista. Todo lo que no sea situar los problemas en esta línea, me parece desenfocado e incluso anacrónico.

## PARTICIPACION SOCIAL

El problema de la participación de los trabajadores es, sin duda, la cuestión más inquietante en la reforma de la empresa. Ahora bien; si el mundo del trabajo no encuentra en este experimento político fórmulas que le brinden perspectivas sugestivas y estimulantes, el fracaso sería muy grave. Posiblemente, habríamos quemado todas las posibilidades de renovación del sistema económico del mundo libre. Por el contrario, si se hace un planteamiento sincero, habremos dado en todos los órdenes de la vida —político, social y económico— un paso de gigante.

Desde luego la corriente social va por ese camino. Hoy día los hombres no quieren tan sólo protección, sino participación, que es un problema distinto. Se considera superada ya la época del paternalismo del Estado, al menos en los países con un cierto grado de desarrollo. Pero hay que pasar la frontera. Debe abrirse un nuevo horizonte laboral donde el mundo del trabajo encuentre algo más que compensaciones salariales, seguros sociales o ventajas siempre cuantificadas. Hay que pensar en el acceso a la gestión y en el acceso al capital, como derechos propios, con todas sus ventajas y responsabilidades. Es una auténtica revolución.

Aquí no caben reticencias. Absolutamente indispensable para dar el «salto», para sacar al mundo libre del «impasse» en que se encuentra.

## SOCIALIZACION

Los problemas de la economía empresarial nos afectan a todos. Hasta ahora únicamente juegan las dos grandes fuerzas económicas —grupos capitalistas y sindicatos—. Están muy bien organizados. Son unos auténticos grupos de presión. Me parece bien que se asocien para la defensa de sus intereses; pero siempre que puedan organizarse, también, los que resultan perjudicados con sus acuerdos. Me refiero claramente a los consumidores.

Estamos en una sociedad de consumo que ha hecho todo lo imaginable para promocionar el mercado, menos organizar a los consumidores. No deja de ser curioso. No interesa, por lo visto, políticamente, que pongan los puntos sobre las «ies» a los empresarios y a los sindicatos.

Desde hace tiempo vengo clamando por la organización de los consumidores para combatir con éxito la inflación. He empleado los tonos más incitantes. Me parece más eficaz que toda esa gama de scandalos, tasas y controles, condenados a la larga o a la corta a la más decepcionante inoperancia. Todo resulta inútil, si no se cuidan los propios consumidores de defender oportunamente sus posiciones en el juego intersocial.

El tratamiento político de las relaciones intersociales es, sin duda alguna, una de las grandes posibilidades de ajuste que tiene el mundo libre. Algo que no se admite más allá del telón de acero. Y esto, no obstante, cuando hay algún desajuste económico, no se duda en emplear fórmulas típicamente socialistas. El socialismo no tiene nada de social. No fue correcto al emplear el vocablo «social» como raíz de su denominación patronímica, porque debió llamarse con más propiedad «estatismo». Es un sarcasmo político que se llama precisamente socialismo a una ideología que persigue, como fin primordial, la estatificación de las fuerzas y organismos sociales.

Están cometiendo los gobiernos errores muy graves: o intervienen al estilo socialista, o dejan a los grandes hacer lo que quieren. Las dos posturas son malas. El intervencionismo es co-

mo un cáncer. Prolifera convirtiendo el tejido social en un entramado administrativo del Estado. Puede matar la libertad social. Claro está que hay otra enfermedad todavía más grave: el marginalismo de los grupos sociales que debieran estar presentes y cuya ausencia, en un momento dado, hace necesaria la intervención del Poder Público. Un verdadero círculo vicioso. Una situación muy propia de nuestras viejas democracias. La solución —la salvación— consiste, como fácilmente puede comprenderse, en renunciar a la política de intromisión por parte del Estado, a cambio de establecer un juego intersocial más pleno, con participación de todos los interesados a fin de lograr un equilibrio de fuerzas en la base, que permita, fácilmente, el arbitraje del Estado.

## ARBITRAJE

El juego intersocial es cada vez más necesario y duro. La Sociedad tiene un claro poder de relación. Los grupos sociales son muy fuertes. No se les puede negar el derecho a que defiendan sus intereses y salgan, si es preciso —que lo es casi siempre— al encuentro de los demás. Crean necesariamente una dinámica de tensiones. Y tienen derecho —aquí está la clave del problema— a la dirección del Estado: a que se establezcan unas reglas de juego que den salida a sus problemas mediante soluciones objetivamente facilitadas.

Se impone, cada vez más, el arbitraje del Estado por toda suerte de razones. Por razones económicas de equilibrio, seguridad y especialmente, en las actuales circunstancias, de lucha contra la inflación. Por razones sociales, de participación de los grupos marginados, a fin de evitar los abusos de los grupos dominantes en exclusiva. Por razones políticas, de quehacer pluralista y democrático: una democracia pluralista no es sólo un cuadro de partidos políticos, sino ante todo un cuadro de autonomías sociales relacionadas —que son las que dan sólido fundamento al juego—. Lo contrario es barullo y anarquía. Y se impone, sencillamente, el arbitraje del Estado, por razones prácticas. Los problemas dejados a libre solución de los interesados, tan sólo se afrontan cuando quieren los grandes; en otro caso se enquistan, no se resuelven. Los gobernantes adoptan común-

mente la táctica del avestruz: meten la cabeza entre las alas para no ver las dificultades que tienen encima. Son notorias las pruebas de abandono, retraso deliberado, impotencia; posturas, en suma, temerarias y complacientes.

No es mucho pedirle al Estado que dirija el juego intersocial. Es lo suyo. Ahora bien, tiene que cambiar sustancialmente de política. No basta con proponérselo, como si fuese un simple acto de gobierno. Por una serie de circunstancias que no considero oportuno analizar, porque nos desviarían del tema, lo cierto es que el Estado se ha convertido en el primer empresario en muchos países. Juega a los negocios como uno más en el mercado de la vida económica. Y, además, lo hace con ventaja y sin temor a la quiebra en caso de pérdida. Esta condición de gestor interesado y dominante le impide regir con la debida autoridad el juego económico. No puede ser a la vez juez y parte: empresario que juega por su cuenta y árbitro que decide. Aquí hay un problema que reclama una solución dirimente.

Desaconsejo rotundamente el actual «modus vivendi», mitad socialista, mitad empresa privada —mitad economía intervenida, mitad economía libre—. No hace más que sembrar confusión, incertidumbre respecto al futuro y debilitación progresiva de la libre iniciativa privada. Si no lo remediamos, llegará el momento en que se sentirá incapaz de valerse por sí misma, e incluso buscará afanosamente la cómoda tutela de la empresa pública. Será el principio del fin. Al menos así ocurrió en Roma. Los síntomas de la caída del Imperio Romano fueron estos: gigantismo administrativo; gobierno de una «élite» de funcionarios gerentes; gastos públicos excesivos; ingresos fiscales antieconómicos; abandono de profesiones y propiedades privadas. Una inflación, en suma, generada por la propia Administración Pública, a la que no hubo manera de combatir con éxito usando los medios convencionales. Creo que debe meditarse mucho esta situación. Puede ser mortal de necesidad para el mundo libre.

Debemos reaccionar pronto. Aconsejo la táctica de repliegue de la Administración Pública a posiciones rectoras, con el decidido propósito de entregar a la empresa privada aquellos negocios que por naturaleza son propiamente suyos. Necesitamos vigorizar la iniciativa social y al mismo tiempo potenciar al máximo la autoridad del Estado, para que imponga un orden y rija con firmeza el juego económico.

No tengo fe en el auto-sacrificio de la Administración Pública, a la que debe forzarse —quiera o no quiera— a resignar muchas competencias. Ni creo tampoco en la idoneidad de los Parlamentos en este tipo de cuestiones. Estamos ante un problema que debe confiarse a la Jefatura del Estado, auxiliada en su nivel por quien sea necesario. Hay que institucionalizar convenientemente la Jefatura del Estado para que tenga fuerza propia. Independencia por encima de los gobiernos, parlamentos y tribunales. Lo más importante que puede hacer un Jefe de Estado moderno es cuidar de que exista el debido equilibrio político en la relación Sociedad-Estado; que las fuerzas sociales no queden marginadas por el Gobierno en los asuntos que directamente les afecten; que las instituciones supremas —parlamento, magistratura, etc.— no impidan con sus negativismos o inercias el avance de la participación social; que exista un arco tendido entre el Jefe del Estado y la realidad social por encima de los particulares designios de los políticos de oficio. Y esto sólo se consigue llevando el arbitraje desde la cumbre: montando desde la Jefatura del Estado la democracia de participación social que reclaman las modernas exigencias.

Tengo mucho miedo a la inflación, como se habrá podido ver a lo largo de este artículo; pero la daría por bien empleada si por este motivo logramos enderezar la política. Es muy grave el problema que tiene delante de sí el mundo occidental. Pero si quiere, puede salvarlo, no sólo con éxito, sino con ventaja. No hay mal que por bien no venga.

Hace falta algo más que unos simples ensayos, reajustes o reparaciones. Por bien concebidos que estén, no serán más que unas cuantas «chapuzas» políticas con resultados mediocres, equívocos, falsos, desproporcionados con el esfuerzo que se realice. Es preciso un replanteamiento a fondo del sistema democrático, todavía basado en el esquema de la Revolución Francesa —en el binomio Estado-Individuo—. Han cambiado los tiempos. La Sociedad se ha potenciado amplia y vigorosamente. Exige participación en el juego: ser algo más que un grupo de presión. Hay que montar otro esquema basado en el trinomio Estado-Sociedad-Individuo. Se requiere una nueva axiología de lo social, que sólo es genuino cuando viene de abajo a arriba. Lo que viene de arriba a abajo es socialismo; sin sustancia política porque la savia se toma de las raíces. Hay que dar mayor sentido de la libertad. Ha de ser

más profunda y plantearse ahora, principalmente en el seno de las propias organizaciones, si no queremos ahogarla con el enervante despotismo de toda suerte de directocracias. Hay que reconsiderar los problemas de la representación, que debe ser sustituida, siempre que sea posible, por la propia protagonización de los interesados. Es ésta, en suma, una visión más social de la democracia. Debe cambiar de signo lo política y aceptar decididamente la marcha progresiva del principio de participación.

Sólo así se llenará el vacío político y se formará el clima necesario para atacar con fundada esperanza, no sólo el problema de la inflación, sino también el de la educación, el de la vida municipal y provincial, el de las relaciones Iglesia y Estado en el amplio campo de la caridad, la asistencia social, etc., etc., el de todos los nudos gordianos que actualmente tiene la política, porque no ha sabido evolucionar al compás de los tiempos, sujeta por una serie de intereses politocráticos y de inercias institucionales de rutinaria y pasada justificación.

Volveré a insistir sobre estos puntos. Quiero terminar recordando una anécdota que me parece muy expresiva. Inquietaban constantemente al Ministro de Finanzas francés, Barón de Louis, pidiéndole que arreglase pronto y bien una economía maltratada por una larga serie de torpezas políticas. Eran los tiempos de la Restauración de Luis XVIII. Creían, por lo visto, sus instigadores, que el Ministro podía arreglar las cosas él solo, mientras los políticos seguían enredando con sus intrigas y arribismos —que tanto son de temer en la primera etapa de un Régimen renovador—. De Louis replicó de un modo contundente, agresivo, seco y destemplado: «Dadme buena política y os daré entonces buenas finanzas».